



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: FUERO SINDICAL
Radicado: 05088-31-05-001-2017-01159-01 (F2-21-005)
Demandante: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Demandado: LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA
Coadyuvante: ASOCIACIÓN SINDICAL UNITARIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO - UNIÓN DE TRABAJADORES UTP – UNIÓN DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS UTP
Procedencia: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BELLO
Providencia: SENTENCIA No.153 DEL 01 DE AGOSTO DE 2022
Asunto: LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL

En Medellín, al primero (01) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, al interior del proceso especial de FUERO SINDICAL conocido bajo el radicado único nacional 05088-31-05-001-2017-01159-01 (F2-21-005), promovido por el **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC** en contra de **LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA**, y en el que se integró el contradictorio con la **ASOCIACIÓN SINDICAL UNITARIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO - UNIÓN DE TRABAJADORES UTP – UNIÓN DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS UTP – SECCIONAL BELLO**, como coadyuvante del demandado, en aras de resolver el Recurso de Apelación impetrado por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 14 de mayo de 2021 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “*Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones*”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda especial de levantamiento de FUERO SINDICAL en contra del señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, tendiente a que se le conceda permiso para hacer efectiva la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años para ejercer la función pública, conforme al proceso disciplinario adelantado contra el susodicho.

Como fundamento fáctico expuso que el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, se encuentra vinculado al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, desde el 13 de noviembre de 1997, desempeñando el cargo de Dragoneante, está adscrito al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN, ubicado en la Diagonal 44 No.39-145, Bello – Antioquia, desde el 18 de octubre de 2006; actúa como Presidente de la junta directiva de la ASOCIACIÓN SINDICAL UNITARIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO - UNIÓN DE TRABAJADORES UTP – UNIÓN DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS UTP – SECCIONAL BELLO, y tiene recomendaciones médico laborales (fols.02-12; págs.02-12, doc.01, carp.01).

Expuso que en razón de algunas quejas presentadas, inició investigación disciplinaria en contra del señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA por la presunta celebración de un negocio con el interno CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO, a quien le solicitó \$1.000.000 para colaborarle con un traslado a la ciudad de Bogotá, dinero que recibió a través de la empresa Efecty, mediante giros en dos contados, el primero, por \$500.000, colocado el 24 de marzo de 2012, y el segundo, por \$500.0000, colocado el 09 de abril de 2012, ambos depositados por la hermana del interno, la señora CLEMENCIA SALGADO FRANCO, en la sucursal Parque Caldas de Manizales, para ser retirados por el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, en la sucursal Parque Principal de Bello, advirtiéndole que con ello habría podido incurrir en la falta gravísima establecida en el literal d) del artículo 48, del Capítulo I, del Libro II, del Título Único de la Descripción de las Faltas Disciplinarias en Particular, según el cual contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o con sus familiares constituyen falta gravísima para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia de instituciones penitenciarias y carcelarias.

Explicó que una vez surtido el trámite disciplinario correspondiente, mediante el Auto 00000014 del 14 de julio de 2017, el ente investigador declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, sancionándolo con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años para ejercer la función pública, decisión que fue notificada personalmente al funcionario el 21 de julio de 2017, y recurrida ante la Dirección

General del INPEC, la cual confirmó la decisión de instancia, mediante la Resolución 2586 del 01 de agosto de 2017, notificada mediante edicto, por la renuencia del funcionario en recibir la notificación personal, decisión que quedó ejecutoriada el 25 de agosto de 2017, según la constancia que obra en el expediente disciplinario.

1.1. Trámite de Primera Instancia

La demanda se admitió mediante auto el 01 de noviembre de 2017 (fol.1336; págs.01-02, doc.06, carp.01), proveído en el que además se ordenó la notificación de la ASOCIACIÓN SINDICAL UNITARIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO - UNIÓN DE TRABAJADORES UTP – UNIÓN DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS UTP – SECCIONAL BELLO, y que se notificó al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA el 05 de marzo de 2018 (pág.35, doc.06, carp.01), y a la organización sindical vinculada, el 12 de febrero de 2019 (pág.147, doc.06, carp.01), a través de la curadora ad litem que el 07 de febrero de 2019 fue designada para la Litis (pág.144doc.06, carp.01).

El señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA presentó contestación el 27 de marzo de 2018 (fols.1370-1385; págs.36-51-, doc.06, carp.01), misma en la que aceptó que se encuentra vinculado al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, desde el 13 de noviembre de 1997, desempeñando el cargo de Dragoneante, que está adscrito al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN, ubicado en la Diagonal 44 No.39-145, Bello – Antioquia, desde el 18 de octubre de 2006, actúa como Presidente de la junta directiva de la ASOCIACIÓN SINDICAL UNITARIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO - UNIÓN DE TRABAJADORES UTP – UNIÓN DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS UTP – SECCIONAL BELLO, cuenta con recomendaciones médico laborales, y que su empleador adelantó en su contra una investigación disciplinaria.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones arguyendo que nunca incurrió en la conducta que le fue enrostrada al interior de la investigación disciplinaria, que los hechos objeto de la investigación disciplinaria supuestamente ocurrieron en el mes de marzo de 2012, que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC tuvo conocimiento de aquellos en la misma época, que la investigación que inició en el año 2012 fue declarada nula, por primera vez, en octubre de 2013, y estuvo suspendida durante seis (6) meses, y por segunda vez, en junio de 2016, y estuvo suspendida por ocho (8) meses; que la acción de levantamiento de fuero sindical pretendido por la entidad demandante se encuentra prescrita. Consecuentemente, propuso la excepción previa de prescripción, y las excepciones de mérito de falta de causa para pedir y prescripción.

La ASOCIACIÓN SINDICAL UNITARIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO - UNIÓN DE TRABAJADORES UTP – UNIÓN DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS UTP – SECCIONAL BELLO, presentó contestación el 06 de marzo de 2019 (fols.1473-1474; pags.152-153, doc.06, carp.01), misma en la que advirtió que no le constaba ninguno de los hechos de la demanda.

1.2. Sentencia de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 14 de mayo de 2021 (fol.1576; docs.11-12, carp.01), por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello, sentencia en la que se declaró próspera la excepción de prescripción, se absolvió al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA de las pretensiones incoadas por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, y se condenó en costas al demandante.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado argumentó que, la acción de levantamiento de fuero sindical se encuentra prescrita, en tanto que, los hechos que se invocan como justa causa ocurrieron el 08 marzo de 2012, la denuncia penal se instauró el 06 de junio de 2012, y en la misma fecha fue informado el Director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN, por lo que la entidad demandante tenía hasta el 06 de agosto de 2012 para iniciar el procedimiento reglamentario, o instaurar la acción de levantamiento de fuero sindical, sin que se hubiere interrumpido el término de prescripción, porque la investigación disciplinaria solo inició el 16 de agosto de 2012, habiendo transcurrido más de dos meses desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que invoca como justa causa.

1.3. Recurso de Apelación

Inconforme con la decisión antes descrita, la apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC (minuto 32:55, doc.11, carp.01), interpuso el recurso de alzada, recabando la revocatoria de la sentencia de primer grado, y en su lugar, instó en que sean acogidas las pretensiones de la demanda, con el argumento de que el término de prescripción, tratándose de servidores públicos, solo comienza a correr desde la fecha en la que termina el proceso disciplinario, momento a partir del cual se tienen por establecida la ocurrencia de los hechos, la gravedad de la falta, y la sanción impuesta, razón por la cual, no era procedente ejercer la acción de levantamiento de fuero sindical desde el momento en que se tuvo noticia de la ocurrencia de los hechos.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

Conforme a lo previsto en el artículo 117 del CPTSS, la decisión de segunda instancia se tomará de plano, previa deliberación de la Sala.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

2.1. Problema Jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar, en primer lugar, si la acción de levantamiento de fuero sindical promovida por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC en contra del señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA se encuentra prescrita, o si el término para ejercer la referida acción se interrumpió durante el transcurso del proceso disciplinario adelantado por la entidad. En caso de hallarse improbadada la excepción de prescripción, esta Corporación se ocupará de establecer, si el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA incurrió en las faltas invocadas por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC como justa causa para la terminación de su relación legal y reglamentaria por destitución del cargo, y si en tal medida, hay lugar a ordenar el levantamiento del fuero sindical que lo ampare.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala revocará la decisión de primer grado, considerando que el término de prescripción debía contarse desde el momento en que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC tuvo conocimiento de la existencia de una justa causa para dar término a la relación legal y reglamentaria que lo vincula con el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, esto es, desde momento en el que alcanzó ejecutoria la decisión en la que se declaró probado y no desvirtuado el cargo disciplinario formulado al demandado y se le impuso sanción de destitución y la accesoria de inhabilidad en el ejercicio de la función pública, y no desde el momento en que la entidad tuvo conocimiento de los hechos que podrían o no constituir la justa causa.

En segundo lugar, se declarará probada la ocurrencia, tipicidad, y gravedad de la falta enrostrada al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, y la observancia de todas las garantías procesales que le asistían, no existiendo otro camino diferente para la Sala que acceder a lo pretendido por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, y autorizar el levantamiento del fuero sindical.

2.3. Solución a los Problemas Jurídicos Planteados

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, conviene señalar que no existe controversia sobre las siguientes premisas fácticas: que el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA mediante la Resolución 4779 el 13 de noviembre de 1997, fue nombrado como Dragoneante Código 5260 Grado 06 de la Planta Global del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC (fols.755-760; págs.43-48, doc.04, carp.01), ostenta la calidad de empleado público, y por lo tanto, está sometido al régimen legal y reglamentario de la entidad (artículo 23 de la Ley 1242 de 1993), está adscrito al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN, ubicado en la Diagonal 44 No.39-145, Bello – Antioquia, desde el 18 de octubre de 2006 (fol.895-896, 901-903; págs.182-183, 188-190, doc.04, carp.01), y actúa como Presidente de la junta directiva de la ASOCIACIÓN SINDICAL UNITARIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO - UNIÓN DE TRABAJADORES UTP – UNIÓN DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS UTP – SECCIONAL BELLO (fols.715-716; págs.03-04, 28-29, doc.04, carp.01).

De igual manera, no se controvierte que el 16 de agosto de 2012, la Oficina de Control Interno Disciplinario del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, resolvió abrir investigación disciplinaria en contra del señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, con ocasión de la queja formulada el 08 de marzo de 2012 por el interno CARLOS ANDRÉS PULGARÍN GUERRA, en la que denuncia una presunta negociación con el demandado para el traslado del interno

CÉSAR AUGUSTO SALGADO FRANCO a un establecimiento penitenciario de la ciudad de Bogotá (fol.72-74; pags.74-74, doc.01, carp.01), hechos por los que se instauró denuncia penal el 06 de junio del mismo año (fol.48-71; pags.48-71, doc.01, carp.01), de la cual fue informado el Director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN en la misma fecha (fol.46; pag.46, doc.01, carp.01).

También se encuentra acreditado que el 14 de septiembre de 2012, se notificó al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA el auto que dio apertura a la investigación disciplinaria (fol.87; pag.87, doc.01, carp.01), que el 18 de abril de 2013 se practicaron las pruebas decretadas (fols.94-101, 104-109; pags.94-101, 104-109, doc.01, carp.01), que el 20 de mayo de 2013 se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria (fol.112; pag.112, doc.01, carp.01), y que el 02 de agosto de 2013 se formuló el pliego de cargos disciplinarios, siendo que, al parecer “... *efectúo un negocio [...] con la señora CLEMENCIA SALGADO FRANCO, hermana del interno CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO [...], presuntamente con el objeto de que le colaborara para el traslado de su hermano [...] a un establecimiento de la ciudad de Bogotá*” (fols.187-199; pag.187-199, doc.01, carp.01), actuación que fue anulada el 04 de octubre de 2013, por falta de competencia para iniciar, practicar pruebas, y dictar fallo en primera instancia de la funcionaria que estaba adelantando el proceso disciplinario (fols.204-209; pag.204-209, doc.01, carp.01), y que fue reanudada el 15 de abril de 2014, fecha en la que el funcionario competente formuló pliego de cargos disciplinarios, por la presunta violación del literal d), del parágrafo 4º, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que establece como falta gravísima “... *contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o sus familiares*” (fols.218-230; pag.218-230, doc.01, carp.01).

Obra también constancia de que el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA rindió descargos el 17 de julio de 2014, oportunidad en la que petitionó, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la apertura de la investigación disciplinaria, y el decreto y práctica de pruebas testimoniales, documentales, y de inspección (fols.238-251; pag.238-251, doc.01, carp.01); solicitudes que fueron desestimadas el 29 de julio de 2014, en primera instancia (fols.253-252; pag.253-262, doc.01, carp.01), y el 08 de octubre del mismo año, en sede de reposición respecto de la nulidad impetrada, (fosl.263-271; pag.263-271, doc.01, carp.01), y el 20 de noviembre de 2014, en primera instancia (fol.278-273, pags.22-27, doc.02, carp.01), y el 04 de junio de 2015, en segunda instancia, respecto de las solicitudes probatorias impetradas (fol.314-318, pags.63-67, doc.02, carp.01).

El fallo de primera instancia se profirió el 30 de septiembre de 2015, proveído en el que se declaró disciplinariamente responsable al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA por la comisión de la falta prevista en el artículo 48, parágrafo 4º, literal d), de la Ley 734 de 2002, consistente

en haber efectuado el negocio de gestión documental y de traslado de establecimiento carcelario con el interno CÉSAR AUGUSTO SALGADO FRANCO, sancionándolo con destitución e inhabilidad general de 10 años (fols.351-376, pags.100-125, doc.02, carp.01), decisión que fue declarada nula el 02 de junio de 2016, por los errores en los que se incurrió en la etapa de la investigación, y que tornan confusa la interpretación del pliego de cargos frente a la conducta investigada, siendo que, una cosa es realizar un negocio, y otra cosa es hacer un favor o recibir una dádiva (fols.412-243, pags.161-172, doc.02, carp.01).

Así las cosas, el 07 de febrero de 2017 la Oficina de Control Interno Disciplinario del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN, formuló pliego de cargos disciplinarios al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, por la presunta violación del literal d), del parágrafo 4º, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que establece como falta gravísima “... *contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o sus familiares*” (fols.432-442, pags.181-191, doc.02, carp.01).

El disciplinado presentó descargos el 29 de marzo del mismo año, solicitando la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a partir de la apertura de la investigación, y el decreto y práctica de pruebas testimoniales, documentales, y de inspección (fols.458-471, pags.211-224, doc.02, carp.01), peticiones que fueron desestimadas el 04 de mayo de 2017, en primera instancia (fols.472-480, pags.225-233, doc.02, carp.01), el día 12 del mismo mes y año, en sede de reposición (fols.519-521, pags.23-25, doc.02, carp.01), y el 22 de mayo de 2017, en sede de apelación (fols.522-525, pags.26-29, doc.03, carp.01).

El fallo de primera instancia se profirió el 14 de julio de 2017, proveído en el que se declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, sancionándolo con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años para ejercer la función pública (fols.598-611, pags.102-115, doc.03, carp.01), decisión que fue confirmada mediante la Resolución 2586 del 01 de agosto de 2017 (fols.657-669 pags.161-173, doc.03, carp.01), notificada por edicto fijado el 17 de agosto de 2017, y desfijado el día 22 del mismo mes y año (fol.694, pag.198, doc.03, carp.01), y que alcanzó ejecutoria el 25 de agosto de 2017 (fol.707, pag.211, doc.03, carp.01).

2.3.1. EL RÉGIMEN GENERAL DEL FUERO SINDICAL

Los institutos del derecho colectivo del trabajo tienen un claro sustrato constitucional, a saber, el derecho a la libre asociación, el derecho a constituir sindicatos, y que sus dignatarios en ejercicio de sus actividades gocen de fuero y otras garantías que les permitan promover la protección de los intereses de los afiliados, buscando siempre el mejoramiento de las

condiciones laborales (artículos 38 y 39 CP), y para ello, a propósito de garantizar que las asociaciones sindicales cumplan con sus objetivos axiales, el ordenamiento jurídico ha previsto como mecanismo protección el fuero para los fundadores, directivos y negociadores de las organizaciones sindicales, definido por el estatuto sustantivo del trabajo como: *"... la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo"* (artículo 405 del CST).

De otra parte, la Corte Constitucional ha recalcado que el fuero sindical no tiene por objeto solo la protección individual del trabajador, sino además la del derecho de asociación, y dentro de ese concepto omnicompreensivo, la libertad de acción de los sindicatos; prohibiendo los apuntamientos de la Alta Corte *"... el fuero sindical no surgió históricamente, ni se encuentra establecido por la ley, para la protección individual y aislada de un trabajador, sino que se trata de un mecanismo, ahora con rango constitucional para amparar el derecho de asociación, que no es, así entendido, de interés particular sino colectivo. La garantía constitucional de fuero a los representantes sindicales está estrechamente ligada con la protección al ejercicio del derecho de asociación sindical, cuya finalidad es procurar que los sindicatos, mediante sus representantes, puedan ejercer la función para la cual fueron constituidos, esto es, la defensa de los intereses económicos y sociales de sus afiliados. La garantía foral va dirigida a la protección del fin más alto que es el amparo del grupo organizado, mediante la estabilidad de las directivas, lo cual redundará en la estabilidad de la organización, como quiera que el representante está instituido para ejecutar la voluntad colectiva"* (Sentencias C-240 de 2005, C-381 de 2000 y C-710 de 1996).

De lo que viene dicho se desprende, en primer lugar, que el fuero sindical es una garantía constitucional para hacer efectivo el derecho a la libre asociación sindical y para proteger la libertad de acción de los sindicatos; en segundo lugar, que el fuero cobija a ciertos trabajadores pertenecientes a una organización sindical, quienes tendrán una serie de garantías laborales, verbi gratia, la prohibición de despido, desmejoramiento de condiciones de trabajo y traslado a otro lugar de trabajo, a menos que exista una justa causa y autorización judicial; en tercer lugar, el fuero sindical hace posible que los representantes de los sindicatos lleven a cabo sus tareas en beneficio de los trabajadores, sin temer las eventuales represalias del empleador, y por último, el fuero sindical no entraña la imposibilidad de despedir, desmejorar o trasladar al trabajador aforado, sino que al hacerlo, el empleador debe: (i) demostrar una justa causa y (ii) solicitar la autorización al juez competente, quien deberá verificar su existencia.

Están amparados por el fuero sindical: a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis meses; b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores; **c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato,** federación o confederación de sindicatos, sin superar el número de cinco principales y cinco suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin exceder de un principal y un suplente, amparo que se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis meses más, y d) Dos de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una comisión estatutaria de reclamos (artículo 406 del CST – Negrita intencional de la Sala).

2.3.2. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL

La Corte Constitucional ha precisado que *"... para arbitrar sobre el fuero sindical, las partes cuentan con la posibilidad de que, el juez, bajo el amparo del Convenio 98 de la OIT, defina sobre la acción del reintegro en favor del trabajador con fuero despedido, desmejorado o trasladado sin permiso previo de autoridad judicial, y la acción de levantamiento de fuero sindical, todas ellas erigidas para analizar si la actuación está mediada por acciones discriminatorias o no, y si por tanto debe mantener el fuero o las condiciones iniciales en las que se realiza"* (T-338-2019).

Frente a esa última acción, se ha afirmado que, si la pretensión del empleador es modificar las condiciones laborales del trabajador aforado o terminar el vínculo laboral, debe de formular una demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, con fundamento en una justa causa, y en cuanto al objeto del proceso de levantamiento del fuero sindical y de las justas causas para despedir un trabajador aforado, se señaló que *"... el objetivo del proceso de levantamiento del fuero es (i) verificar la ocurrencia de la causa que alega el empleador, y (ii) análisis de su legalidad o ilegalidad"* (T-220 de 2012).

En relación con la prescripción de dichas acciones judiciales, conviene memorar que el artículo 118 CPTSS dispone: *"Las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha de despido, traslado o desmejora. **Para el empleador desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso.** Durante el trámite de la reclamación administrativa de los empleados públicos y trabajadores oficiales, se suspende el término*

prescriptivo. Culminado este trámite, o presentada la reclamación escrita en el caso de los trabajadores particulares, comenzará a contarse nuevamente el término de dos (2) meses" (Negrita intencional de la Sala).

Sobre el particular, la jurisprudencia nacional ha advertido que si bien es cierto que el legislador fijó dos (2) meses como término de prescripción de las acciones de reintegro y de levantamiento de fuero sindical, también lo es que en cada caso concreto debe tenerse en cuenta la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-381 de 2000, en el entendido que "... ante la formulación de la acción de levantamiento de fuero sindical y a efectos de valorar la declaratoria de su prescripción, es constitucionalmente necesario verificar que la justa causa invocada (i) no se extienda en el tiempo y (ii) sea oportuna al momento de promoverse la acción".

No obstante, y para el caso concreto, el a quo confundió el hecho generador de la justa causa, con la justa causa en sí misma, recurriendo a una interpretación exegética, que sin duda no consulta el espíritu garantista y tuitivo del derecho laboral, que justamente originó la reforma contenida en el artículo 49 de la ley 712 de 2001, con el que se adicionó el artículo 118 A al CSTSS, justamente para indicar que el término de prescripción de la acción de fuero sindical en cabeza del empleador, comienza a contar desde la fecha en que aquel tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa, o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso.

En la Sentencia C-381 del 2000, la Corte Constitucional categórica y llanamente precisa: "... Por ende, y en aras de la naturaleza de la norma en mención, considera esta Corporación **que el empleador, cuando decida interponer la acción de levantamiento del fuero sindical, deberá hacerlo inmediatamente al conocimiento de la ocurrencia de una causa justa para la autorización de despido, traslado o desmejora del trabajador.** Esto surge necesariamente del sentido normativo que se desprende del artículo 39 de la Carta, del artículo 25 ibídem, y del Convenio 98 de la OIT, que garantizan una protección real y efectiva al fuero sindical, **teniendo en cuenta que el fundamento mismo para el ejercicio del mencionado levantamiento, es necesariamente la existencia y conocimiento por parte del empleador de una justa causa que justifique las pretensiones de levantar el fuero al trabajador"**, proveído en el que además adoctrinó que "... el término que el empleador tiene para interponer la acción de levantamiento de fuero es concomitante con el conocimiento de la ocurrencia de una causa justa para solicitar la autorización de despido, traslado o desmejoramiento del trabajador aforado, **desvirtuando así la aplicación de otras interpretaciones diversas a la que precisamente se desprende de una lectura simple del artículo en mención"** (Negritas intencionales de la Sala).

Así las cosas, esta Corporación entiende que, en el caso concreto, el término de prescripción debe contarse desde el momento en que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC tuvo conocimiento de la existencia de una justa causa para terminar la relación legal y reglamentaria que lo vincula con el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, esto es, desde el 25 de agosto de 2017 (fol.707, pag.211, doc.03, carp.01), cuando alcanzó ejecutoria la Resolución 2586 del 01 de agosto de 2017 (fols.657-669 pags.161-173, doc.03, carp.01), a través de la cual se confirmó la decisión adoptada mediante el Auto 0000014 del 14 de julio de 2017 (fols.598-611, pags.102-115, doc.03, carp.01), y en el que declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, por la violación del literal d), del parágrafo 4º, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que establece como falta gravísima “... *contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o sus familiares*”, sancionándolo con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años para ejercer la función pública; y no como equivocadamente lo entendió el fallador de primera instancia, quien consideró que el término de prescripción empezaba a contarse desde el momento en que la entidad demandante tuvo conocimiento de los hechos que podrían o no constituir la justa causa, esto es, la simple noticia de la presunta ilicitud funcional, desde el 06 de junio de 2012 (fol.46; pag.46, doc.01, carp.01), cuando se informó al Director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN sobre la denuncia penal instaurada por el interno CARLOS ANDRÉS PULGARÍN GUERRA, por una presunta negociación para el traslado del interno CÉSAR AUGUSTO SALGADO FRANCO a un establecimiento penitenciario de la ciudad de Bogotá (fol.48-71; pags.48-71, doc.01, carp.01).

Ahora bien, en la decisión objeto de apelación el cognoscente de primer grado sostuvo que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, tenía hasta el 06 de agosto de 2012 para iniciar el procedimiento reglamentario, o instaurar la acción de levantamiento de fuero sindical, sin que hubiere interrumpido el término de prescripción, siendo que la investigación disciplinaria solo inició el 16 de agosto de 2012, habiendo transcurrido más de dos meses desde del 06 de junio de 2012, fecha en la que tuvo conocimiento del hecho invocado como justa causa; argumento frente al cual conviene relieves lo indicado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, por la cual se expidió el Código Disciplinario Único, y que establece “*La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un sólo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas*”, razón por la cual se deduce manifiestamente desacertado arribar a la conclusión de que el INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, solo contaba dos (2) meses para iniciar la acción disciplinaria, so pena de que la acción de levantamiento del fuero sindical prescribiera.

Corolario de lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia, en la que se declaró próspera la excepción de prescripción, y por contera, se estudiará de fondo la pretensión de levantamiento del fuero sindical.

2.3.3. EL FUERO SINDICAL Y LA DESTITUCIÓN DISCIPLINARIA

La responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos es un desarrollo necesario de la cláusula de Estado Social de Derecho (artículo 1° de la CP), que implica una vinculación positiva y negativa de los servidores públicos con el ordenamiento jurídico, en el ejercicio de sus actividades de empleo público (artículos 121 y 122 de la CP), para la satisfacción de los fines esenciales del Estado (artículos 2° y 123 de la CP) y, a la vez, exige que se deriven responsabilidades por la violación de la Constitución o de las leyes, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones públicas (artículos 6° y 124 de la CP); se trata de un instrumento constitucional para la materialización de los principios que rigen el ejercicio de la función administrativa (artículo 209 de la CP) y, en razón de todo lo anterior, constituye una institución de interés público (artículo 92 de la CP).

Ahora bien, no existe una regla constitucional que expresamente regule lo relativo a la sanción disciplinaria del servidor público amparado con el fuero sindical. Si bien es cierto que el artículo 125 de la CP prevé que los empleados de carrera pueden ser desvinculados, entre otras causas, por violación del régimen disciplinario, ello, por sí solo, no constituye un fundamento de constitucionalidad para la norma objeto de censura y que autoriza a la desvinculación del servidor público aforado, sin necesidad de solicitar y obtener previamente el levantamiento del fuero sindical.

El artículo 125 superior constituye una determinación constitucional de la justa causa de la desvinculación del empleado de carrera, pero no responde a la cuestión de si, en tratándose de empleados aforados, la ocurrencia de dicha justa causa debe o no ser examinada por el juez laboral, a efectos del levantamiento del fuero sindical, y aunque no existen pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de esta problemática en sede del control abstracto, sí existen decisiones en materia de tutela, al respecto, resulta relevante el razonamiento realizado por la Alta Corporación en la Sentencia SU-036 de 1999: *“No obstante, si el servidor público a sancionar goza de la garantía del fuero sindical, será necesario que previa o concomitante con la aplicación del Código Único Disciplinario, se solicite la*

declaración de ilegalidad del cese de actividades, o la calificación judicial de la justa causa por el juez laboral, en los términos del artículo 113 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, para que sea procedente su despido. No puede emplearse el mencionado estatuto, como un instrumento "legal" para desconocer derechos de rango fundamental como lo son el derecho de asociación y libertad sindical, y cuya principal garantía se encuentra en el fuero sindical. En consecuencia, la aplicación del régimen disciplinario no anula ni puede desconocer el fuero sindical, pues será necesaria la intervención del juez o la declaración de ilegalidad del cese, para que proceda el despido o la suspensión del servidor público amparado con esta garantía sindical".

Aunque la oficina de control interno es un órgano del más alto nivel dentro de la estructura de la entidad pública, se encuentra desprovista de garantías orgánicas y estatutarias que amparen su independencia frente a la dirección de la entidad y que generen la suficiente confianza, bajo la teoría de las apariencias, de que el poder disciplinario no será utilizado con fines antisindicales, y por ello, **"... no existe razón constitucional que justifique la excepción al deber del levantamiento del fuero sindical, porque, de aceptar tal excepción, se desconocería que la finalidad del fuero sindical consiste en amparar al trabajador cubierto y, por esta vía, al sindicato, frente a las decisiones adoptadas por su empleador, quien podría utilizar sus potestades jerárquicas para afectar la libertad sindical y, para ello, se confía en el juez laboral la facultad de corroborar la existencia de la justa causa, en este caso, la infracción del régimen disciplinario. Por el contrario, interpretar que no es necesario el levantamiento del fuero sindical frente a la destitución disciplinaria, proferida incluso por las instancias de la entidad en la que labora el servidor aforado, constituiría una vulneración del artículo 39 de la Constitución [...]. Finalmente, debe aclararse que aunque el levantamiento del fuero sindical, cuando ello se requiere, pueda significar que la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social realice un control especial de la validez del fallo disciplinario, ello no es en sí mismo inconstitucional, teniendo en cuenta que la Constitución no dispuso que el control de los actos administrativos fuera exclusivo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, por el contrario, la configuración del reparto competencial entre dicha jurisdicción y la Jurisdicción Ordinaria, fue un asunto confiado al Legislador [...]. El control judicial del fallo disciplinario realizado por el juez laboral persigue el amparo de la libertad sindical y, por lo tanto, se dirige únicamente a examinar si, desde un punto de vista fáctico y jurídico, la destitución pronunciada constituye justa causa para la desvinculación del servidor público, con miras a excluir la existencia de un acto de persecución sindical. Es, en estos términos, un control material y no meramente formal, aunque limitado teleológicamente".** (Sentencia C-033 de 2021 - Negrillas de la Sala).

Sobre el punto medular que concita la atención de la Sala, conviene relieves que para fundamentar dicha postura, la Corte Constitucional aquilató: *“Al respecto, puede citarse el razonamiento realizado por el Tribunal Superior de Medellín, al resolver una apelación frente a una sentencia de levantamiento de fuero sindical, luego de proferida una sanción disciplinaria de destitución: “La competencia de la jurisdicción ordinaria laboral no se limita a establecer la existencia del acto administrativo a través del cual se destituye al trabajador, la regulación constitucional y legal consagran una garantía material y no simplemente formal, en protección de los derechos fundamentales de asociación y libertad sindical de los titulares y en defensa de la organización sindical misma, especialmente cuando la potestad disciplinaria es ejercida por el mismo empleador y podría ser utilizada para el desconocimiento de derechos de orden sindical. II Por ello, en criterio de la Sala, la garantía foral permite que la jurisdicción ordinaria laboral valore la conducta del aforado para establecer si es constitutiva de una justa causa de destitución del cargo, con independencia de la revisión de la validez del acto por la jurisdicción contenciosa administrativa”* (Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión, Sentencia del 4 de abril de 2019, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD contra Óscar Mendieta Pérez, rad. 05001-31-05-013-2018-00015-01).

Corolario de lo anterior, esta Sala de Decisión acometerá el control judicial sobre la legalidad del fallo emitido por la Oficina de Control Único Disciplinario del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC mediante el auto Auto 0000014 del 14 de julio de 2017 (fols.598-611, pags.102-115, doc.03, carp.01), y confirmado a través de la Resolución 2586 del 01 de agosto de 2017, por la Dirección General de la misma entidad (fols.657-669 pags.161-173, doc.03, carp.01).

2.3.4. LA FALTA DISCIPLINARIA.

En el cartulario se encuentra plenamente demostrado que el que el 07 de febrero de 2017, la Oficina de Control Interno Disciplinario del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, formuló pliego de cargos disciplinarios en contra del señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, en los siguientes términos (fols.432-442, pags.181-191, doc.02, carp.01):

“4.1 CARGO ÚNICO:

Señor LUIS ALBERTO PINZON ZAMORA usted en condición de Dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, adscrito al EPMSC de Medellín, a principios del mes de marzo de 2012, tal y como se desprende de la noticia criminal de fecha 06 de junio de 2016, al parecer efectuó un negocio con el interno CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO, con el objeto de colaborarle con el traslado para un establecimiento de la ciudad de Bogotá, solicitándole la suma de un millón de pesos (\$1.000.000), dineros que recibió en dos contados, cada uno de

quinientos mil pesos (\$500.000) por intermedio de la Empresa Efecty, el primer giro se efectuó el 24 de marzo de 2012, desde la ciudad de Manizales, y el segundo giro, igualmente de quinientos mil pesos (\$500.000), el día 09 de abril de 2012, por la misma empresa citada, para lo cual el interno recurrió a la colaboración de su hermana, la señora CLEMENCIA SALGADO FRANCO, quien depositó las sumas de dinero en EFECTY, Sucursal Parque Caldas, con destino a la Sucursal Parque Principal de Bello, y beneficiario LUIS ALBERTO PINZON con cédula de ciudadanía 93434826, efectuándose el pago del primero de los giros el 27 de marzo, y el segundo giro el mismo día 09 de abril de 2012.

Señor LUIS ALBERTO PINZON ZAMORA usted pudo incurrir en la violación del “LIBRO II, PARTE ESPECIAL, TITULO ÚNICO, DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS EN PARTICULAR, CAPITULO I. Artículo 48. Faltas gravísimas...” “... Parágrafo 4°. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias:

d) Contraer deudas o **efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos** o con sus familiares...” NEGRILLA Y SUBRAYADO FUERA DE TEXTO.

De conformidad con lo anterior se puede evidenciar que al parecer el señor PINZÓN ZAMORA efectuó un negocio con el interno CESAR SALGADO FRANCO frente a la posibilidad de colaboración para un traslado y en consecuencia la señora CLEMENCIA SALGADO FRANCO, hermana del citado interno, le giró al disciplinado la suma de un millón de pesos M/cte \$1.000.000,00”.

Así mismo, obra constancia de que la a Oficina de Control Único Disciplinario del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, mediante el Auto 0000014 del 14 de julio de 2017 (fols.598-611, pags.102-115, doc.03, carp.01), resolvió:

“PRIMERO: Declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado al señor LUIS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.434.826 expedida en Flandes – Tolima, en su calidad de Dragoneante del Establecimiento Penitenciario de Medina Seguridad y Carcelario de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SANCIONAR al señor LUIS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.434.826 expedida en Flandes – Tolima, con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años para ejercer la función pública.

(...)”.

Como colofón, se advierte que, a través de la Resolución 2586 del 01 de agosto de 2017, la Dirección General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC (fols.657-669 pags.161-173, doc.03, carp.01), resolvió:

“CONFIRMAR la sanción impuesta al señor LUIS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.434.826 expedida en Flandes – Tolima, adoptada mediante el Auto 0000014 del 14 de julio de 2017, proferida por la Oficina de Control Interno Disciplinario, en desarrollo del proceso disciplinario No. 1339-12, por medio del cual se impuso sanción disciplinaria

consistente en destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años para ejercer la función pública, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

(...)"

2.3.4.1. De la comisión de la falta: En orden a determinar si el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA incurrió en las conductas que le fueron enrostradas por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, importa señalar que el interno CARLOS ANDRÉS PULGARÍN GUERRA, en la fecha 06 de junio de 2012 (fol.48-71; pags.48-71, doc.01, carp.01), presentó ante la Fiscalía General de la Nación la siguiente noticia criminal:

"Yo, Carlos Andrés Pulgarin Guerra, interno de Bellavista, con el número de reseña 284261 del Pabellón No.2, por medio de la presente me permito redactar los inconvenientes que se presentan con el dragoneante Pinzón:

A principios del mes de marzo aproximadamente, me encontraba con el señor Cesar Augusto Salgado, interno del Pabellón No.2, a quien por distintos medios ayudaba para poder obtener un traslado a la ciudad de Bogotá, fue entonces en donde nos acercamos al señor Pinzón y yo le pregunté si podía hacer llegar una solicitud de petición de buena conducta del señor Cesar a la Dirección, comentándole el propósito de ésta, y a su vez, en presencia del señor Cesar, comentándole la desilusión que tenía don Cesar porque los abogados no resultaban con nada, y la plata se perdía. Fue en ese momento cuando yo le dije al dragoneante Pinzón si él conocía alguien que nos podía colaborar o si él tenía contactos, la respuesta de él fue que esperaríamos para ver en que nos podía colaborar y que esperaríamos a que llegara la solicitud que nos llevó para el certificado de la conducta, anexó (sic) que dijo tener ayuda de parte de la secretaria para que esta carta no demorara. Pocos días después y estando en el turno laborando en el área de sanidad, me mandó a llamar con el dragoneante Mogollón, que era pabellonero en el patio 2 en esa fecha, y cuando baje a sanidad, me comentó si la respuesta ya había llegado, pero fue excusa para de verdad decirme que él no cobraba por un favor, pero que había por lo menos que darles alguna cosa a las secretarias del establecimiento de Bellavista y de Bogotá, por la rosca que decía tener con ellas, y a su vez, pidiéndome \$20.000 (veinte mil pesos), los cuales le fueron entregados dos horas más tarde. Cuando me dirigí al pabellón tomé asesoría del dragoneante Mogollón sobre Pinzón, dándome buenas recomendaciones, ya que éste señor hacía parte de un sindicato, y andaba escoltado, lo que nos dio a don Cesar y a mí confianza.

Cuando llegó la respuesta sobre la conducta me acerqué de nuevo al dragoneante Pinzón al área de sanidad, y fue entonces cuando nos pidió las solicitudes de traslado para él comenzar con su trabajo, y de nuevo me pidió plata, esta vez fueron \$50.000 (cincuenta mil pesos), los cuales se los entregó el señor Cesar horas más tarde. Lo que no tengo claro fue si él le entregó los cincuenta mil o si solo le dio treinta mil. Dos días después aproximadamente, de nuevo me mandó a llamar al rastrillo, pero esta vez fue el interno Oscar, quien redime pena en el área del anexo, el que me entró las solicitudes hechas a computador por el dragoneante Pinzón para que don Cesar las firmara y les colocara las huellas, estas fueron llevadas o serían llevadas a la coordinación de Bellavista para el MY Fabián Ríos Cortez, y para Bogotá, hacia el MY Ricaurte. Estas hojas ya firmadas las entregué personalmente a él, a los dos días después, y fue entonces cuando de nuevo me dijo que necesitaba "cincuenta lucas" y le dije que los bajaba más tarde. Como se hacía difícil salir del rastrillo a un interno, y como yo hacía parte del grupo de Derechos Humanos en el Pabellón conocido como "La Ambulancia del Patio" me quedaba más fácil salir, y quedé de llevárselos a las 6pm que él cogiera turno. El señor Erwin Rivera, interno del pabellón, se me acercó en esos días y al ver y escuchar lo que estábamos haciendo a don Cesar, me pidió el favor que hablara con Pinzón si él le podía colaborar con un traslado a la Cárcel de Pedregal,

ya que su compañera se encuentra recluida en esa cárcel, y yo le dije que me acompañara, que le debía bajar una plata, y aprovechara para hablar directamente con él, a su vez es testigo directo de cuando le entregué el dinero, y cuando él le comentó lo que quería, fue más directo, ya que le dijo cuánto vale y en donde le consigno si esto es un hecho. La respuesta del dragoneante Pinzón fue de que esperara que se encontraba muy ocupado y fue desde entonces que decidió esperar a que se diera lo del señor Cesar, haciéndolo testigo de que nunca paso nada, y lo hizo desistir de pedir su ayuda.

Al día siguiente, de nuevo me hizo llamar el dragoneante mogollón un sábado del mes de marzo a las 5:30 de la mañana, cuando de nuevo me dirigía sanidad me dijo que todo estaba listo, me entregó el recibido de las solicitudes, tanto del MY Ríos, como la del MY Ricaurte, a su vez, que le consignara \$1.000.000 (un millón de pesos) antes del mediodía, en dos cuentas o entidades diferentes, que le consignara \$500.000 en Servientrega de Medellín, y \$500.000 en Servientrega de Bello, que esta era para darle a las secretarias que hicieron el trabajo, ya que estas pobres son asalariadas, y que algo extra no les cae mal.

Busque a don Cesar y el llamó a sus hermanas para que le consignaran desde Caldas (Manizales), y solo le consignaron \$500.000, a las 9:30, al Servientrega de Bello. El dragoneante Pinzón me dio el número de teléfono móvil 3505866486 para que le confirmara, pero que no le dijera específicamente las cosas, sino que le dijera que los 500 internos ya se habían trasladado, pero ese día no me contestó.

Pedí contacto con él aproximadamente 4 días, fue cuando me mandó a llamar a las 10am, y me dijo que yo era un faltón, que él le había dado la plata de cuenta de él a las secretarias, y había descompletado la plata del computador de las hijas. El desconocía que ya se le habían consignado los \$500.000, y cuando se lo dije, me dijo que los reclamaba al mediodía que descansara. En ese mismo día me le acerque en horas de la tarde y ya los había retirado, pero me dijo que los otros \$500.000 cuando, pero don Cesar había dicho que cuando se vieran los resultados. El dragoneante me dijo que era un hecho, y que máximo un mes ya estaba en Bogotá, que se lo consignara, que tranquilo. Fue a su vez cuando le comenté de una mujer Yarley Carolina Cano Londoño, cédula 1046932992, quien fue sancionada por intentar ingresar \$25.000, para ver si le podía retirar la sanción, él se llevó la información, y le ofrecí \$200.000 (doscientos mil pesos) por ese favor, y él me dijo que también se los consignara que a él le decían el "todo poderoso".

No se le consignaron los \$200.000 ni los \$500.000, y fue con el tiempo que no se veía llegar nada sobre el proceso ni respuesta por parte del MY Ríos, ni nada. Consultó don Cesar con los familiares en Bogotá sobre las cartas, y le dijeron que se si fueron radicadas, pero están en una orden entre 45.000 cartas, y fue a su vez consultamos en Bellavista, y nadie nos daba respuesta. Fue entonces que nos dimos cuenta que solo radicó dos cartas el dragoneante Correa, quien prestaba sus servicios en el Patio 5. Se dirigió a Cesar y a mi persona para ver cómo nos había ido con Pinzón, y nos aconsejó demandarlo, aun el dragoneante Mogollón al ver que pasaban más de dos o tres meses nos aconsejó lo mismo, y fue en estos cruces de palabras cuando me enteré que Pinzón había hecho llamar a don Cesar para que le consignara los otros \$500.000, y él los consignó, por esto era el desespero del hombre, y más cuando yo había servido de intermediario para que él pidiera su plata. Lo llamamos varias veces a su móvil y él no único que nos decía era que todo estaba listo, que solo era esperar, hasta que le dije al señor Cesar que me dejara hablar con él y nos devolviera la plata que el temor a las represalias que pueda tomar lo hacía echar para atrás. Pero decidimos llamarlo y enfrentarlo.

Cuando lo llamamos le dije que no me aguantaba a las hermanas de don Cesar encima, que le devolviera la plata, pero el insistió en hablar con don Cesar, y es claro que por su temor él decidiera no actuar, y lo convencieron de dejar las cosas quietas, no sé lo que le dijo, pero hasta la fecha no ha querido darme toda la información que le guardábamos, y aun haciendo este escrito me dijo que no quería tener problemas con este dragoneante, pero yo me sentía como

un zapato, ya que estoy seguro de que don Cesar estaba pensando que yo tenía parte en esta plata. Decidí llamar al señor Pinzón el viernes 1 de junio de 2012, al medio día, desde el número 3012929753 hasta su móvil, y le reclamé que estaba muy indignado, como el teniente Perilla también había hablado con don Cesar, y éste por temor no le contó nada, yo decido contarle. Fue por esto que le dije por medio de esta llamada a Pinzón que un teniente me necesitaba y que yo no le iba a decir mentiras por algo en lo que yo solo soy una víctima, ya que él no me había dado ni pa' un tinto de esta plata. Me respondió que eso era extorsión (sic), que mucho cuidado, y le dije que no era una extorsión, que solo quería que respondiera, y que como yo no había recibido ningún interés económico no tenía que decir mentiras, más aún cuando no había resultado con nada. Me dijo que, si el nombre de él es mentado en algún momento, me atuviera a las consecuencias, que se las cobraba como fuera, y como no tenía como más llamarlo, me dijo que lo llamara en la noche para ver cómo le había dicho.

Fue desde entonces que decidí buscar a una persona de confianza para hablar con el subdirector, y busqué a la señora Jenifer en tratamiento y desarrollo, quien muy comedidamente lo buscó, y me hicieron hablar con la P.J. Horas más tarde lo llamé, y le dije que no era nada, que yo le había dicho al teniente que fue una amiga quien nos hizo la labor y nos había colaborado, y nos había cobrado \$200.000 por radicar las cartas, siendo mentiras, tanto que hable con un teniente como que era una amiga, pero era solo para calmar sus amenazas. Hoy 02 de junio, en horas de la mañana me acerqué a don Cesar para que me colaborara en la información, y lo único que me dijo fue que no quería problemas con el dragoneante Pinzón, y no quiso darme la información por su temor, y a su vez me dijo que él no estaba dispuesto a colaborar, pero fue aún por temor a éste señor, el dragoneante Pinzón.

Anexo que de ésta problemática tienen conocimiento y pueden testificar los señores Dragoneante Mogollón, Dragoneante Correa, Temiente Perilla, Internos Erwin Rivera, Herver Alexander Hincapié, Cesar Augusto Salgado, y Carlos Andrés Purgarán Guerra".

Por su parte, en declaración juramentada rendida por el interno CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.033.269 de Neira – Caldas, en la fecha 18 de abril de 2013, en desarrollo de la investigación disciplinaria adelantada (fols.94-101; pags.94-101, doc.01, carp.01), este expresó:

"PREGUNTADO: Diga cuál es su nombre completo, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, residencia, estudios realizados, profesión, ocupación u oficio, situación jurídica, CONTESTO: Mis nombres, apellidos e identificación son como quedaron anteriormente anotados, natural de Neira-Caldas, nacido el 08 de febrero de 1972, estado civil divorciado, estudios realizados bachiller, mi situación Jurídica es Condenado a 50 meses por el delito de estafa y porte ilegal de armas, con domicilio en Bogotá, Teléfono no tengo. PREGUNTADO: Conoce usted el motivo por el cual ha sido llamado a rendir la presente Declaración Juramentada, de ser positiva su respuesta realice un relato claro y detallado de los hechos. CONTESTO: Si tengo conocimiento, Llegue a la cárcel de Bellavista el 01 de febrero de 2011, por el delito de estafa y porte ilegal de armas, el 07 de junio de 2011, fui condenado por el Juzgado 7 Penal de Medellín en un periodo de 50 meses, llevo viviendo en la ciudad de Bogotá desde el 19 de enero de 1991, en donde tengo dos hijos en la actualidad cuyas edades están entre 8 y 12 años, motivo que me llevó a empezar un trámite de traslado a esta ciudad o a un pueblo cercano, después de haber conversado con el Subdirector OVALLE de ese entonces, a quien le radique una carta de traslado el 23 de junio de 2011, y para la cual tuve respuesta el 22 de diciembre de 2011, casi 6 meses después, de ahí en adelante realice solicitudes tanto verbales a lo cual la respuesta era, que mi traslado era posible cuando llevara un año en Bellavista, ante tanta insistencia y el afán de poder ver a mis hijos conocí al señor CARLOS ANDRES PULGARIN GUERRA, quien se desempeñaba en el patio 2 de

Bellavista como encargado de Derechos Humanos, quien me ofreció ayuda relacionándome con el Dragoneante PINZON, para lo cual sostuvimos una entrevista con él, al que le comente mi situación, y al que se llegó en un arreglo de que por la suma de \$1.000.000.00 millón de pesos me trasladaría para Bogotá en menos de un mes, puesto que tenía los contactos suficientes para este trámite, recurrí a la ayuda de mis hermanas y se tomó la determinación de pagarle en dos contados, uno el 24 de marzo de 2012 por \$500.000.00 mil pesos, los cuales los colocaron en servientrega oficina parque Caldas-Manizales; posteriormente el 09 de abril de 2012 me mandó llamar el señor PINZON al área de sanidad que estaba en su cargo en ese entonces, informándome que debía consignarle los otros \$500.000.00 mil pesos ya que él ya le había cancelado a los contactos con un dinero que él tenía para la compra de un computador de sus hijas, para lo cual llame a mis hermanas y efectivamente se le hizo la otra consignación, desde ese momento, le realice varias llamadas a su celular para averiguarle cómo iba mi trámite, a lo que siempre me respondía con evasivas, a los días le sugerí a CARLOS que ya había pasado mucho tiempo y no me habían cumplido con lo prometido y que yo ya había pagado la totalidad de la plata que me habían pedido a lo que con asombro CARLOS se dio cuenta que yo ya había pagado la totalidad del dinero y entonces que se iba a hablar con él a ver qué era lo que pasaba, según lo que ellos conversaron PINZON le respondió "que en estos días le consignaba una lagañita en la cuenta" a lo que CARLOS esperó, y a lo que no vio su comisión en la cuenta, tomó la decisión de denunciarlo por escrito ante Policía Judicial, según comentarios de CARLOS, en las conversaciones telefónicas ya nos había amenazado, y el día de esta denuncia, hubo un comité con el PJ de apellido TABIMA, el Capitán PERILLA, y verbalmente en el área de Reinserción el Teniente quien es hoy en día el Director nos ofreció total respaldo, en esta reunión se llegó a un acuerdo como lo puede ver con los altos cuadros de mando, que para radicar dicha denuncia ante la Fiscalía se necesitaban las copias de las consignaciones, a lo que yo inicialmente me negué pensando en mi seguridad y la de mis hijos, en vista de que progresara la amenaza por parte del señor PINZON, entonces ellos nos ofrecieron que a CARLOS lo pasarían al patio de Alta Seguridad y efectivamente a las tres horas lo trasladaron y a mí me prometieron que me trasladarían para Bogotá o a un pueblo cercano a Bogotá, a lo cual accedí y les entregué las copias, ellos me informaron que a partir de ese momento le quedaba rotundamente prohibido el ingreso a los patios al Dragoneante PINZON, y que en caso tal de llegarlo a ver en algunas de esas instalaciones se le informara urgente a la Policía Judicial, a raíz de este inconveniente y en procura de no facilitarle las cosas en caso de que se tomaran represalias en contra de mi integridad, internamente busque la forma y la ayuda en el pasillo de los paramilitares ya que a ellos les llevan la comida al pasillo y ya no tendría que exponerme a que esa amenaza se llevara a cabo, el día 16 de Julio de 2012, recibí una llamada por parte del Pabellonero en el cual me informaba que si yo había salido a las áreas de sanidad por qué no me había hecho borrar a lo que con asombro le respondí que en ningún momento me habían notificado o llamado y que mucho menos había salido, el día 18 de julio de 2012 me llaman al patio que me necesitaba el Dragoneante VASQUEZ urgente, (Encargado de Deportes de Bellavista) cuando llegué donde este Dragoneante, en un tono sigiloso me dijo "hermano espéreme un momentico yo llamo a PINZON que él quiere hablar con usted" a lo que le respondí que yo no quería hablar con él por qué hay un inconveniente y eso ya lo tiene directamente la Policía Judicial, y regrese de inmediato al patio, para su verificación en el libro de minuta del pabellonero del patio 2 están registradas la supuesta salida del 16 de julio de 2012 y la del 18 de julio de 2012, fechas que coinciden con su horario de trabajo, en las horas de la tarde aproximadamente a las 02:30 PM nuevamente soy llamado y cuando llegué al área del pabellonero me encuentro directamente con el Dragoneante PINZON, quien me conduce de inmediato al área de Deportes me dijo "vea Cesar el primero de agosto me citaron a la Fiscalía, ya hable con el abogado, entonces que me sugiere el abogado, que ese millón de pesos hay que hacerlo ver como un préstamo, entonces que hablara con usted y que le diera la dirección y el teléfono de mi hermana en Manizales, para él o el Abogado subir a hablar con ella y firmar dos letras de cambio por esos valores para que de esa forma él no saliera perjudicado y solo le impusieran una sanción", a lo que le respondí que con la fiscalía no se jugaba y que de inmediato se darían cuenta y por otra parte si el veía que no me podía hacer el favor de ayudarme para el traslado a Bogotá porque no me había devuelto

la plata y no me hubiera dado tantas vueltas y no me hubiera ilusionado como lo hizo, hasta el punto de que desde ese día que se radicaron las cartas tenía la maleta empacada y mis hijos igualmente tenían la ilusión de verme más seguido en Bogotá, ante la negativa lo que hizo fue ponerse de mal genio y repetir que CARLOS y yo no sabíamos con quien se habían metido, a lo que de inmediato salí para el patio, al día siguiente recibí la visita en la mañana del PJ TAVIMA preguntándome si era cierto que PINZON me habló en las horas de la tarde del día anterior, a lo que de inmediato diligenciamos de nuevo una solicitud de traslado para Bogotá, días después me volví a encontrar con el PJ TAVIMA quien asombrado me pregunta que porqué todavía continuaba en Bellavista a lo que le respondí que no sabía nada, nuevamente diligenciamos otra solicitud y a la semana siguiente recibo otra vez la visita del PJ quien me dice "Cesar yo me voy de traslado para Buenaventura, la parte que me correspondía en este caso ya la realice y le informo que su solicitud de traslado con el informe, con el visto bueno del Mayor FABIAN RIOS, se le entregó directamente a Monsalve del área jurídica, entonces este pendiente que ahí va su trámite", con la renuncia del Mayor FABIAN RIOS, Director de la Cárcel, y según conversación telefónica con la Doctora MARTHA ROCIO PENUELA de Asuntos Penitenciarios de Bogotá a quien le conté mi situación y cómo iba mi solicitud de traslado me informa que mirando el sistema no hay por ningún lado documentación alguna, que nuevamente radicara a solicitud y tomara fecha y radicado que con esa información ella me colaboraba, para estos días queda el Teniente Flores como Director encargado y al encontrarme con él también se sorprende de que aun este yo ahí, le comenté que debía hacer nuevamente el trámite, a lo cual lo realizamos directamente con el Dragoneante CORDOBA encargado de la oficina Jurídica de los patios, más la valoración médica por parte del médico de turno de sanidad, más la firma del Teniente FLORES, y que el directamente los enviaría a Bogotá, al pasar los días al parecer estos documentos también se extraviaron, en conclusión, han sido muchas las solicitudes que nunca llegaron a Bogotá, a lo cual me dirigí a la oficina de Atención al Ciudadano donde la Doctora MONICA MARIA MARTINEZ, y le comenté mi situación quien muy amablemente empezó a ayudarme de la mano con el señor EDWIN ROSAS HUERTAS, Coordinador del GRUVI, en vista de que el Dragoneante PINZON en calidad de presidente del sindicato de Bellavista ha hecho destituir y trasladar a muchos guardianes, quien, a mi modo de ver, media guardia lo aprecia y la otra mitad se muestran enemigos de él, y es ahí donde entra mi caso para sus enemigos sacar provecho como fue en Bogotá interrumpiéndole un ascenso al señor PINZON, y por otra parte me da la impresión que ese poder que tiene PINZON lo utilizó para que mi traslado no prosperara fuera del departamento en aras de poder llegar por medio de intermediarios a que yo me retracte de lo sucedido, pero que realmente sucedió, quedándome aquí en la cárcel de Itagüí en donde ya cumplo casi 27 meses si poder ver a mis hijos. PREGUNTADO: Indique al Despacho que personas tienen conocimiento de los hechos, para que sean escuchados en Declaración juramentada, indicando el nombre completo de los mismos. CONTESTO: No tengo conocimiento. PREGUNTADO: Indique al Despacho si tiene conocimiento del estado actual de la denuncia interpuesta por el señor CARLOS PULGARIN ante la Fiscalía General de la Nación. CONTESTO: Por mis propios medios me di a la tarea de buscar en qué Fiscalía se encuentra, y está en la Fiscalía No.54. Unidad de Administración Pública de Medellín, por el Delito de Concusión, con la Doctora ANGELA MEJIA, yo hable con ella y me dijo que como acababa de llegar de vacaciones, tomó mis datos para enviarme un investigador para hacerme una entrevista, y hasta la fecha no he tenido ninguna notificación de nada. PREGUNTADO: Tiene algo más que decir, corregir o enmendar a la presente diligencia. CONTESTO: Si, este problema se presenta debido a la demora de las respuestas de las cartas que yo he radicado, dando pie para que personas sin ningún sentido de pertenencia a la entidad se aprovechen de estas situaciones en donde por último, ni siquiera yo como interno pago las consecuencias son mis hijos un niño de 8 años y otro de 12 a quienes no he podido ver desde el 01 de febrero del 2011, por lo anterior insisto, que dentro de lo posible me colaboren con el traslado para Facatativá o Zipaquirá, ya estoy en fase de mediana seguridad y quiero ver a mis hijos, adicionalmente quiero adjuntar a la diligencia la certificación de Efecty de las consignaciones de los \$500.000.00 mil pesos."

A su turno, en el plenario reposa la versión libre y voluntaria rendida por el señor Dragoneante LUIS ALBERTO PINZON ZAMORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.434.826 en la fecha 18 de abril de 2013 (fols.104-108; pags.104-108, doc.01, carp.01), dentro del trámite del informativo disciplinario en que expresó:

"Por sus anotaciones civiles y personales. CONTESTO: Mi nombre, apellidos y número de cédula son los mismos escritos al comienzo de la presente diligencia, natural de Flandes-Tolima, estado civil casado, 37 años de edad, estudios realizados secundaria, residente en la Avenida 36 No.44-18, Barrio Las Vegas de Bello Antioquia, teléfono 3188071555, actualmente laboro en la EPMSC de Medellín. PREGUNTADO: El despacho le advierte, que la presente investigación tiene génesis con base y fundamento a la queja interpuesta por el interno CARLOS ANDRES PULGARIN GUERRA el día el día 02 de junio de 2012, la cual también es presentada ante la Fiscalía General de la Nación; documento del que usted ha tenido conocimiento y que en esta diligencia se le pone de presente; que explicación da al respecto. CONTESTO: Quiero informarle al ente investigador que si bien es cierto no niego el recibo de dinero por vía giro por la empresa Efecty, dejo a disposición de la investigación que en ningún momento he solicitado, pedido u obligado a ningún interno prebendas o pagos por ningún tipo de favor, para la fecha de los hechos el interno SALGADO me busca en el pabellón de sanidad donde me encontraba de comandante y me comenta la situación que estaba viviendo por su permanencia en la cárcel de Bellavista, situación dentro de la cual se encontraba la ausencia de sus hijos o la no posibilidad de verlos, lo cual para el interno SALGADO lo estaba afectando a él y a ellos, también me comentó de que ningún funcionario le había querido hacer el favor de radicarle una solicitud de traslado en la Dirección del Establecimiento para lo cual me vi obligado como funcionario de la Institución, y por concepto de atención y humanización del interno, a radicarle este documento en la Dirección del Penal, sitio a donde el interno no tiene acceso, posteriormente por conocimiento del interno de mis múltiples viajes a la ciudad de Bogotá me solicitó el favor que en vista de que los documentos que ya había enviado no surgían (sic) efecto, le llevara y radicara en la Dirección General el mismo oficio ,solicitando su traslado, para lo cual no vi ningún inconveniente y lo radiqué en la oficina de correspondencia de la Dirección General, posteriormente a mi regreso a la ciudad de Medellín y en el puesto de trabajo le entregue al interno el recibido o radicado de dicho documento, en ningún momento hubo exigencia económica, ni de otro tipo, ni tampoco hubo compromiso de resolver su solicitud en su favor, ya que no cuento ni tengo la potestad ni está dentro de mis funciones los traslados de internos, días después el interno me ofreció en agradecimiento a los favores ya realizados un detalle según él, y posteriormente me informo de la consignación de \$500.000.00 mil pesos por vía Efecty de servientrega, procedí a decirle al interno que en ningún momento se pretendiera direccionar esto con cobro pero a la insistencia del señor interno manifestándome que su familia se encontraba muy agradecida por los radicados de su solicitud, procedí a recibir estas consignaciones, cada una de \$500.000.00 mil pesos, recibiendo \$482.500.00 mil pesos en cada retiro bajo mi nombre mi número de cedula y mi firma ,posteriormente me informa el interno SALGADO días después que la familia había llamado a preguntar, sobre su solicitud y que le habían informado de que si se encontraba radicado, pero que se encontraba dentro de las 4700 solicitudes que existían en el momento, procedí a informarle que ese ya era un proceso con una dependencia determinada, donde no tenía ningún tipo de injerencia o asignación de funciones como Dragoneante de Bellavista, las cosas quedaron así, dejando escrito de que si el interno CARLOS ANDRES PULGARIN salía del pabellón con el interno SALGADO era porque el interno PULGARIN desempeñaba actividades de promotor de salud o mal llamado AMBULANCIA, dentro del pabellón 2, y era quien acompañaba a los internos al área de sanidad, pero que en ningún momento el interno PULGARIN el interno SALGADO y mi persona hicimos ningún pacto o negociación para conceder el traslado del interno SALGADO, una sola vez lo vi junto al interno SALGADO cuando nos encontrábamos hablando sobre su solicitud; para el mes de mayo del 2012, fui retirado del servicio de sanidad y asignado a la reja principal de la guardia externa, en el mes de junio salí a vacaciones y el primero de junio recibí una llamada del

interno PULGARIN desde el interior de la cárcel Bellavista manifestándome que a él no se le había dado nada y que él no quería perjudicarme, le dije que de que le estaba hablando y me dijo que de la plata del traslado del interno SALGADO, le manifesté que en ningún momento yo le había cobrado y en ningún me había comprometido a trasladarlo, que esto era un proceso directamente de Bogotá, me manifestó que él iba a hablar si no le daba algo para él, en ese momento fue cuando le conteste que eso era una extorsión que tuviera mucho cuidado, el día 19 de junio fui citado por la organización sindical UTP a una asamblea general en las instalaciones de la CGT Bogotá y es allí donde, por intermedio de una funcionaria administrativa del INPEC también convocada a la asamblea, me comenta que si era verdad que me habían denunciado en Medellín por Concusión, desconociendo esta situación, llame al Establecimiento y no me dan razón de esto, sino que me comentaban de que por ahí había un cuento que estaba denunciado, posteriormente en la asamblea me entero por medio del señor hoy Teniente SERNA RENGIFO ALBERTO, también convocado a la asamblea, quien también laboraba en Bellavista hoy en Santa Marta, que el señor Dragoneante en ese entonces, hoy Teniente, GARCIA JARAMILLO RAUL, tenía en su poder la noticia criminal o el escrito de la denuncia que se me había entablado por el delito de Concusión y que la tenían ahí con el objetivo de frustrar mi postulación a la Junta Directiva Nacional de la UTP a la cual me encontraba apoyado por varias personas, pero en aras de la aclaración de los hechos no realice mi postulación temiendo al degrado de mi honra sin ni siquiera tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, me dirijo y llamo a los funcionarios de Policía Judicial de Bellavista interrogar por qué si yo no había sido notificado de los que se me imputaba otra persona ya tenía copia del escrito y me respondieron que el señor Mayor RÍOS, Director del Penal de Bellavista en ese entonces había solicitado la respectiva copia, desconociendo ellos el objetivo de la misma, regreso de las vacaciones a la Ciudad de Medellín a mis labores en la Cárcel de Bellavista, presumiendo que regresaba a la compañía Bolívar a la cual pertenecía como es normal al regreso de las vacaciones de todo funcionario y me encuentro ,con que he sido cambiado de compañía, asignándome a la compañía Nariño o de apoyo administrativo o mal llamada especiales, aduciendo mi discapacidad ya que sufro la ausencia de un órgano visual, pero que esto no había sido nunca resaltado o dispuesto para mi impedimento a laborar en la compañía de vigilancia desde hace tres años, que sucedieron los hechos de la agresión de que fui víctima, en aras del cumplimiento recibí la notificación y me asignaron a la oficina de registro y control de suma importancia y responsabilidad donde lo único que se de ella es que allí se manejan las certificaciones y calificaciones de conducta del personal de internos pero que desconocía todo tipo de procedimientos o sistemas que allí se manejen, por tal motivo manifesté verbalmente mi inquietud y fui asignado a la oficina de Bienestar Social y Salud ocupacional del establecimiento carcelario Bellavista, con una intención perceptiva de querer sacarme de la parte interna del penal con el objetivo de no tener contacto con el personal demandante, pero que otras personas a las cuales he afectado directa o indirectamente con mis informes o denuncias internas si tenían acceso, llegándome información de que se estaba impulsando al interno denunciante para hacerme el daño jurídico, penal y disciplinario que sea necesario;, el 02 de septiembre del 2012 fui abordado por el Dragoneante BENAVIDES SUAZA, miembro del Grupo de Policía Judicial de Bellavista informándome que el interno CARLOS PULGARIN lo había abordado manifestándole que quería hablar conmigo, que me dijera que subiera al pabellón 16 a lo cual le respondí al PJ que no tenía nada que hacer en el pabellón 16, que no era mi intención hablar con él cuándo evidencié la intención de daño a mi honra, de las cuales él era partícipe, posteriormente el mismo PJ me informa que el interno PULGARIN le dijo que le mandara cualquier cosa que él me podía sacar del problema a lo cual no accedí, posteriormente el interno me envía un documento con el mismo PJ de su puño y letra dirigido a la Fiscalía General de la Nación de fecha 04 de octubre, donde le pide a la fiscalía la conciliación conmigo manifestando que la intención de él es recuperar el dinero para poder dar por terminado de forma libre y voluntaria este proceso, este documento ya reposa en el archivo del proceso penal y donde me hace una exigencia de \$1.800.000.00, de lo cual no entiendo como habla el interno de recuperar algo que no ha perdido y como habla de una suma aludiendo otra en la demanda (la cual anexo), posteriormente no he tenido ningún tipo de comunicación ni física, verbal, ni escrita con ninguno de los dos internos, me entere que habían sido trasladados

para la cárcel de Itagüí, y no sé nada mas de ellos, dejando en el resultado de esta investigación mi responsabilidad basada en la necesidad, pero solicitando se tenga en cuenta mi hoja de vida mi recorrido institucional, mis calificaciones de servicio de forma cuantitativa la calidad y eficiencia del mismo, y manifestando que al contrario de ser un funcionario de conducta reprochable, he sufrido la inclemencia de la sociedad, las amenazas de la delincuencia las cuales me han llevado la separación de mi hogar en dos ocasiones, todo esto me ha llegado por beneficiar a los reclusos o a los funcionarios que realizan actividades irregulares, los cuales los he denunciado oportunamente y a los cuales y en mi punto de vista no se le da la importancia necesaria a las denuncias. PREGUNTADO: Se le pone de presente diligencia de Declaración Juramentada rendida por el señor interno CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO, que tiene que decir al respecto en aras de proteger su derecho a contradicción y defensa de la prueba adelantada. CONTESTO: Es totalmente falsa la declaración dada, a excepción de lo que manifesté del recibo del dinero en las dos consignaciones por otorgamiento voluntario, no por cumplimiento a ningún cobro que yo le hiciere por algún favor que yo me comprometiere con él, existen dos funcionarios a los cuales el hace referencia, y a los cuales se pueden llamar a declarar, que son el Dragoneante MOGOLLON PEÑA y CORREA JUAN CARLOS, quienes según su denuncia estarían implicados, ya que manifiesta que ellos impulsaron a la denuncia, que digan cuantas veces los mande buscar o cuantas veces fui por ellos, el interno SALGADO manifiesta que el Dragoneante VASQUEZ lo llevo hasta el área de deportes y que posteriormente me fue a llamar a mí, que le pregunten a dicho funcionario si esto es verdad, que pregunten a los diferentes pabelloneros en que momento he ido a buscarlos al patio, que pregunten en las oficinas jurídicas del establecimiento, de la regional o de la Dirección General o de cualquier otra oficina en qué momento he ido a patrocinar o a manifestar o a solicitar el traslado de algún interno, cualquiera que sea el tiempo el modo y lugar, para darle veracidad a lo que se me culpa. PREGUNTADO: Indique al Despacho si usted ha tratado o trató de realizar algún tipo de devolución de dinero al citado interno. CONTESTO: La situación económica en la que me encontraba en ese entonces, recibiendo un descuento en la nómina por la incapacidad surgida, con ocasión a la pérdida de mi ojo izquierdo, me llevo a la necesidad de recibir este dinero, ya después de conocidas las intenciones de este mal llamado regalo por ese interno, intenté hacer devolución del dinero a cuenta de la persona que me gira pero en aras de que esto no sea tenido en cuenta y previa consulta a mi abogado defensor, no se vio procedente esta devolución hasta tanto no se aclare la situación, más sin embargo estoy dispuesto a adquirir esta responsabilidad y a devolver el dinero recibido. PREGUNTADO: Desea algo más que agregar, corregir a esta diligencia. CONTESTO: Yo pido respetuosamente se tenga en cuenta lo antes mencionado, se tenga en cuenta de lo que aquí he manifestado verbalmente y voluntariamente, que a pesar de haber recibido este dinero en esta ocasión, basado en la necesidad esencial y familiar que estaba sufriendo en ese momento, no soy un funcionario corrupto, mi historial lo dice por sí solo, además si estuviera cometiendo, o si los hechos que se me imputan fueran ciertos, como se entiende que un funcionario con la trayectoria que tengo y los años de experiencia bajo la defensa sindical de los funcionarios, permitieran o accedieran a que el pago de un hecho irregular se me hiciera en una entidad reconocida con sus respectivos registros de archivo y que este cobro lo hiciere personalmente bajo mi firma y huella sistemática que allí se requiere para el retiro o envío de cualquier tipo, de ahí dejo en manos de ustedes el resultado de la investigación".

De otro lado, milita en el diligenciamiento copia de la misiva que el interno CARLOS ANDRES PULGARIN GUERRA remitió a la Fiscalía General de la Nación el 04 de octubre de 2012 (fols.104-108; pags.104-108, doc.01, carp.01), de la cual es pertinente trasuntar el segmento siguiente:

"Yo, CARLOS ANDRÉS PULGARIN GUERRA, identificado con el número de CC 15.371.450 de Medellín, condenado por el delito de hurto agravado, y actualmente recluso en el Pabellón No. 16 de la Cárcel Bellavista, me dirijo a su despacho por medio de este escrito con el fin de solicitarle la viabilidad de conciliar con el dragoneante PINZÓN ZAMORA, dado que el denunció que

entablé es contra él, ya que mi intención es recuperar el dinero que se le dio, por los daños ocasionados, el cual consta de \$1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos), por estos motivos quiero llegar a un acuerdo para dar por terminado este denuncia. Quiero dejar constancia en este escrito que lo hago de forma libre y voluntaria, porque mi deseo no es perjudicar al funcionario. Muchas gracias".

Prueba basilar de la responsabilidad disciplinaria del accionado obrante en el legajo es la certificación emitida por la compañía EFECTY LTDA. (fol.180-183; pag.180-183, doc.01, carp.01), y en la que se dejó constancia de que la usuaria MARÍA CLEMENCIA SALGADO FRANCO, identificada con la CC 24.827.072, remitió, desde la Sucursal Parque de Caldas (Manizales), hacía la Sucursal Parque Principal de Bello (Antioquia), en favor del señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, identificado con la CC 93434.826, los siguientes giros de dinero: el primero, por valor de \$500.000, en la fecha 24 de marzo de 2012, a las 09:43:43, y el segundo, por valor de \$500.000, en la fecha 09 de abril de 2012, a las 08:54:49.

Adicional a lo anterior, se advierte que en el interrogatorio de parte rendido en el devenir del proceso que convoca la atención de la Sala, el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA el 02 de julio de 2019 (desde el minuto 11:55, fols.1478-1489; pags.157-170, doc.06, carp.01), admitió que en noviembre de 2012 fue llamado por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la denuncia presentada por CARLOS ANDRES PULGARÍN (15:10), y que no conoce el estado actual de la investigación (15:25).

Así mismo, rindió declaración sobre los hechos el señor JORGE ELIECER VÁSQUEZ BARRERA (desde el minuto 17:15, fols.1478-1489; pags.157-170, doc.06, carp.01), quien indicó que era funcionario del INPEC hace 24 años, desde el año 1995, siempre en el EPMSC de Medellín (17:30), que conoce al demandado como compañero de trabajo (18:05), que solo tenía un conocimiento muy somero sobre el objeto del proceso (18:35), que lo único que sabe es que un interno de apellido Pulgarín hizo referencia a él en un informe, indicando que él, como encargado del área de deportes, le facilitaba la salida del patio para entrevistarse con el señor Pinzón, pero la verdad es que no conoce al interno, y que Pinzón no tenía oficina (19:00); que durante el tiempo que ha conocido al demandado laborando para el INPEC su comportamiento ha sido ético, moral, muy servicial, con muchas cualidades, y sin antecedentes disciplinarios (22:05), que no conoce a los internos CARLOS ANDRÉS PULGARÍN GUERRA ni CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO, porque son muchos los internos en el establecimiento (22:40), y que desconoce la existencia de investigaciones disciplinarias o penales en contra del demandado (23:40).

Por último, en desarrollo de la actividad probatoria en este juicio se escuchó en declaración a CARLOS FELIPE BENAVIDEZ SUAIZA (desde el minuto 24:10, fols.1478-1489; pags.157-170,

doc.06, carp.01), quien manifestó que trabaja para el INPEC en la Cárcel Bellavista (24:40), que conoce al demandante desde el año 2007, como compañeros de trabajo (25:10), que no recuerda que se hubieran presentado problemas entre internos de Bellavista y funcionarios de la entidad entre los años 2012 y 2013 (26:40), que no sabe cuáles eran las funciones del demandado para el año 2012 (27:20), que en el año 2012 un interno le solicitó que lo llevara a hablar con el señor Pinzón, y le empezó a contar el caso que tuvo con el demandado (29:15); que le aconsejó al interno que lo mejor era que no hablara con Pinzón, porque si ya había una denuncia en Fiscalía, era mejor evitar el contacto con él (29:20), que el interno realizó un escrito con firma y huella, y él se lo entregó a Pinzón para que supiera que era lo que quería el interno (29:40), que no recuerda cual era el problema que tenía el interno con el demandado (29:55), que durante el tiempo que ha conocido al demandado con el INPEC, ha sido un funcionario muy ejemplar, nunca recibió ninguna queja de él, ni ningún comentario de algún interno (30:30), que no le conoce procesos disciplinarios (30:55), que no recuerda el nombre del interno al que ha visto haciendo referencia (32:50), que de los 8.000 internos que tenía la cárcel en el año 2012, no recuerda a los internos CARLOS ANDRÉS PULGARÍN GUERRA o CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO (33:30).

Así pues, la Sala encuentra acreditado que el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, más allá de toda duda, incurrió en la conducta señalada por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, esto es, que el demandado recibió las sumas de dinero referidas en los hechos de la demanda, como consecuencia de la realización de acuerdos soterrados que pactó verbalmente con el interno CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO, con el fin de gestionar ante las dependencias competentes su traslado a un establecimiento carcelario de la ciudad de Bogotá o cercano a esta; a juzgar porque el mismo accionado admitió haber recibido de la señora MARÍA CELMENCIA SALGADO FRANCO la suma de \$1.000.000, a través de la compañía de giros EFECTY LTDA., en dos contados de \$500.000, el 24 de marzo de 2012 y el 09 de abril del mismo año, y aunque afirmó que recibió dicha suma dinero, bajo el entendido de que el interno se los había girado de forma libre y voluntaria, en razón de haberle colaborado con la radicación de los documentos requeridos para que se efectuara su traslado de establecimiento carcelario, lo cierto es que, sobre la exigencia que hiciere el demandado para recibir la consabida suma de dinero, con el fin de gestionar y obtener el traslado de penal, no solo obra la declaración del interno directamente implicado, sino además, la versión rendida por el señor CARLOS ANDRÉS PULGARIN GUERRA al interior del trámite disciplinario, quien aseveró de manera clara y categórica haber presenciado los hechos de forma directa.

Por otra parte, la Sala no puede pasar por alto lo pregonado antaño por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en torno de que *“... a ninguna de las partes le es dable producir sus propias pruebas, es decir, que la parte que hace una declaración de un*

hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio" (CSJ SL del 29-09-2005, radicación 24450, criterio reiterado en la SL del 02-07-2008, radicación 24450, CSJ SL17191-2015, radicación 43284; SL1024-2019, radicación 70302; SL3308-2021, radicación 76146), y en virtud de ello, las declaraciones rendidas por el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, no tienen la fuerza probatoria suficiente para desvirtuar la ocurrencia de los hechos sobre los que rindió su versión en el trámite de la investigación disciplinaria que se le adelantó por el INPEC, y que lo puedan favorecer.

Aunado a lo anterior, esta Corporación aprecia que el interrogatorio de parte de LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA y las declaraciones rendidas por JORGE ELIECER VÁSQUEZ BARRERA y CARLOS FELIPE BENAVIDEZ SUAZA, recaudadas en desarrollo de la presente actuación judicial, no aportan suficientes elementos de convicción en derredor del objeto de la Litis.

2.3.4.2. De la tipificación de la falta: Ahora bien, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC concluyó que la conducta en la que incurrió el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, constituye falta gravísima, para lo cual es menester remitirnos a las previsiones contenidas en el CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, Ley 734 de 2002, normativa vigente para la época de los hechos, la cual entroniza como falta gravísima “... contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o con sus familiares”, para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias (literal d) del parágrafo 4º del artículo 48 – Subraya intencional de la Sala).

En línea de lo anterior, se colige que cuando el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, recibió las sumas de dinero giradas a través de la compañía EFECTY LTDA., a nombre del interno CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO, en cumplimiento de lo pactado verbalmente para que gestionara el traslado para otro establecimiento carcelario, trasgredió abiertamente las disposiciones de orden legal y reglamentario establecidas para los servidores públicos del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.

2.3.4.3. De la calificación de la falta: En lo que tiene que ver con la calificación de la falta, el CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, Ley 734 de 2002, establece que “... *Las faltas disciplinarias son gravísimas, graves, y leves*” (artículo 42), y que “... *las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código*” (artículo 43), y como la conducta en la que incurrió el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA fue calificada por el legislador como gravísima, a esta jurisdicción no le es dable realizar gradación de la falta endilgada al demandado.

2.3.4.4. De la culpabilidad: En materia disciplinaria está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa (artículo 13 de la Ley 734 de 2002), responsabilidad que la el Consejo de Estado discriminó bajo las siguientes definiciones:

Dolo	Conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción y querer su realización.	Artículo 22 del Código Penal.
Culpa Gravísima	Ignorancia supina, desatención elemental, violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.	Artículo 44 (parágrafo) de la Ley 734 del 2002.
Culpa Grave	Inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.	Ibídem.

(CE, Sección Segunda, Sentencia 17001233300020140003201 (16302015), Ene. 31/18)

En materia disciplinaria, el dolo debe estar conformado por los siguientes elementos: el conocimiento de los hechos, el conocimiento de la ilicitud y la voluntad. Respecto a ello, la doctrina ha establecido: *“El dolo se considera como la intención deliberada que tiene el funcionario investigado de desatender el ordenamiento, de lo cual tiene conocimiento dada su formación su experiencia, las particulares funciones que le han sido asignadas o por haber sido advertido de la incorrección de su proceder o de la falta de cumplimiento de condiciones fijadas en la Ley, las que debía tener en cuenta y aplicar especialmente”*¹. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que: *“El dolo, en materia disciplinaria, implica que el sujeto disciplinable haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar en contravía a éste; por tanto, el conocer ya involucra el querer, ya que, si se tiene conocimiento y pese a eso se realiza la conducta, es porque efectivamente quiere el resultado”* (T- 319 A de 2012).

Así las cosas, la Sala colige que el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA incurrió en la conducta enrostrada por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, de forma dolosa, siendo que, en su calidad de dragoneante, recibió curso de formación sobre los derechos, deberes y prohibiciones del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, como lo son la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario y el Decreto 407 de 1994, por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en los que se prohíbe realizar o efectuar tratos negocios o recibir dádivas de parte de los internos o familiares de estos (ver el literal b), artículo 45, Ley 65-1993, y el numeral 2º,

¹ Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruiz. Página 183

artículo 17, Decreto 407-1994); a más de que es aún más reprochable en razón de la experiencia obtenida por el accionado en el ejercicio del cargo de Dragoneante, el cual conviene memorar, venía desempeñando desde el 13 de noviembre de 1997 (fols.755-760; págs.43-48, doc.04, carp.01).

Corolario de todo lo anterior, se tiene por acreditado que el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, dolosamente recibió de la señora MARIA CLEMENCIA SALGADO FRANCO, hermana del interno CESAR AUGUSTO SALGADO FRANCO, la suma de \$1.000.000, como consecuencia de lo convenido verbalmente con aquel, para gestionar su traslado a un establecimiento carcelario de la ciudad de Bogotá o cercano a esta, conducta que fue tipificada por el legislador como una falta gravísima.

2.3.5. LA SANCIÓN DISCIPLINARIA

2.3.5.1. De la tipificación de la sanción: De conformidad con lo previsto en el CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, Ley 734 de 2002, el servidor público puede enfrentar la “... *destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima*” (numeral 1º del artículo 44). La destitución e inhabilidad general implica la terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, la desvinculación del cargo, la terminación del contrato de trabajo, y la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera (numeral 1º del artículo 45).

La inhabilidad general se impone por un término de diez (10) a veinte (20) años (inciso 1º del artículo 46), y el término de duración se fija de acuerdo con los siguientes criterios: a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga; b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función; c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero; d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos; e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado; f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso; g) El grave daño social de la conducta; h) La afectación a derechos fundamentales; i) El conocimiento de la ilicitud; y j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad (numeral 1º del artículo 47).

Ello así, se deduce que la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez años para el ejercicio de funciones públicas, impuesta al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, mediante el Auto 0000014 del 14 de julio de 2017 (fols.598-611, pags.102-115, doc.03, carp.01), corresponde a la prevista por el legislador, y según la naturaleza de la falta cometida por el disciplinado.

2.3.5.2. Del procedimiento que debe seguirse para la imposición de la sanción: Finalmente, cabe anotar que según lo previsto en el CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, Ley 734 de 2002, el procedimiento disciplinario debe adelantarse por la respectiva oficina de control interno disciplinario (artículo 66), esto es, la oficina o dependencia que conforme a la ley tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria (artículo 77), con observancia en que la actuación disciplinaria deberá desarrollarse conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción (artículo 94).

La investigación disciplinaria es procedente cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria (artículo 152), y tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado (artículo 153).

En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas, la investigación disciplinaria no podrá exceder de dieciocho (18) meses (artículo 153), la evaluación de la investigación disciplinaria que permita la formulación de cargos, debe adelantarse dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término de la investigación (artículo 161), y el fallo se proferirá dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión (artículo 169A); y aunque el proceso disciplinario de la referencia inició el 16 de agosto de 2012, con la apertura de la investigación disciplinaria (fol.72-74; pags.74-74, doc.01, carp.01), y terminó con fallo de primera instancia del 01 de agosto de 2017 (fols.598-611, pags.102-115, doc.03, carp.01), en el transcurso de la actuación se cumplieron los términos antes descritos, siendo que, entre la fecha de apertura de la investigación disciplinaria, 16 de agosto de 2012, y la fecha en que se formuló el pliego de cargos, 02 de agosto de 2013, solo transcurrieron once (11) meses, y dieciocho (18) días, y que entre la fecha en que venció el término del traslado para alegar, 04 de julio de 2017, siendo que la decisión adoptada en última instancia sobre el decreto de las pruebas se notificó el 15 de junio de 2017 (fol.539, pag.43, doc.03, carp.01), y que el término para alegar es de diez (10)

días (artículo 169), y la fecha en la que se profirió el fallo de primera instancia, el 14 de julio de 2017 (fols.598-611, pags.102-115, doc.03, carp.01), solo transcurrieron ocho (8) días hábiles.

Y aunque la actuación administrativa se retrotrajo hasta la formulación del pliego de cargos en dos oportunidades, la primera, el 04 de octubre de 2013, por la falta de competencia para iniciar, practicar pruebas, y dictar fallo en primera instancia de la funcionaria que estaba adelantando el proceso disciplinario (fols.204-209; pag.204-209, doc.01, carp.01), y la segunda, el 02 de junio de 2016, por los errores en los que se había incurrido en la etapa de la investigación, y que tornaban confusa la interpretación del pliego de cargos frente a la conducta investigada (fols.412-243, pags.161-172, doc.02, carp.01), con ello no se vulneró el derecho al debido proceso del disciplinado, en la medida en que, dichas actuaciones correspondieron precisamente al saneamiento de los errores procedimentales que viciaban de nulidad el proceso, garantizando al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA el debido proceso con el surtimiento de cada una de las etapas del proceso disciplinario.

Bajo ese horizonte, concluye la Sala que la sanción impuesta por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, a través de la Oficina de Control Disciplinario, corresponde a la prevista por el legislador, de acuerdo con la naturaleza de la comisión de la falta acreditada, y que el procedimiento adelantado se encuentra acorde al consagrado por el legislador.

Así las cosas, y habiéndose probado la ocurrencia, tipicidad, ilicitud funcional y mayúscula gravedad de la conducta -culpabilidad- en la que incurrió el señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, y que todas las garantías que le asistían al accionado fueron respetadas, se configura una justa causa para acceder a lo pretendido por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, y autorizar el levantamiento del fuero sindical.

4. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 365 del CGP, y en vista de que se revocará el fallo de instancia confutado, la parte vencida en el juicio, señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, será condenado a pagar las costas de ambas instancias; con arreglo a lo previsto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho para a segunda instancia, a favor del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, la suma de \$1.000.000, que corresponden a un (1) SMMLV, como límite mínimo permitido; las costas de la primera instancia, serán fijadas por el cognoscente de primera instancia, tásense.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2021, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello, dentro del proceso especial de FUERO SINDICAL promovido por INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC en contra de LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, y en su lugar:

*“**PRIMERO:** LEVANTAR el fuero sindical que cobija al señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, como presidente de la junta directiva de la ASOCIACIÓN SINDICAL UNITARIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO - UNIÓN DE TRABAJADORES UTP – UNIÓN DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS UTP – SECCIONAL BELLO.*

***SEGUNDO:** COSTAS a cargo del señor LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA”.*

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de LUÍS ALBERTO PINZÓN ZAMORA, fijándose como agencias en derecho en favor del INPEC, la suma de \$1.000.000, que corresponden a un (1) SMLMV. Las agencias en derecho de la primera instancia serán tasadas por el a quo.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL 2550 de fecha 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES
Magistrado



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas, corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario